



Doi: <https://doi.org/10.70577/asce.v5i1.649>

Recibido: 2025-12-30

Aceptado: 2026-01-12

Publicado: 2026-02-10

Optimización del Gasto Público en Proyectos de Infraestructura en Ecuador

Optimization of Public Spending on Infrastructure Projects in Ecuador

Autor

Nelson Pérez Villarroel¹

<https://orcid.org/0000-0001-5343-0192>

nperez@uagraria.edu.ec

Universidad Agraria del Ecuador

Ecuador – Guayaquil

Jessenia María Tite López²

<https://orcid.org/0000-0001-6487-6341>

p7001256666@ucvvirtual.edu.pe

Universidad César Vallejo

Lima – Perú

Cómo citar

Pérez Villarroel, N., & Tite López, J. M. (2026). Optimización del Gasto Público en Proyectos de Infraestructura en Ecuador. *ASCE MAGAZINE*, 5(1), 1376–1400. <https://doi.org/10.70577/asce.v5i1.649>



Resumen

El artículo de investigación, está relacionado a las actividades gubernamentales del gobierno del Ecuador, profundiza algunos aspectos de la generación de proyectos de infraestructura de los cuales se generan cambios sociales dentro del país, como es el desarrollo económico y social (Calderón & Servén, 2014). En este sentido, se dé una mirada al control que existe y las limitantes que se encuentran en el desarrollo de estos proyectos que a la final terminan ser fuente de ingresos para funcionarios corruptos solapados por un gobierno que en su misma autoría ve como se llevan el dinero de los contribuyentes, es acaso un mal de todos los países que están en vías de desarrollo o es el común denominador para el despilfarro, en éste artículo abordaremos los compromisos que tiene el gobierno ante los ciudadanos y que estén relacionados a los ODS, así como llevar a cabo una auditoría y control por los organismos competentes y la participación activa de la población, como parte veedora de los proyectos en ejecución, la metodología estará relacionado en casos y análisis documentados como la CEPAL, el objetivo central es optimizar el gasto público, alineado al desarrollo sostenible, maximizando la eficiencia y transparencia, buscando mecanismos para mejorar la pirámide en los principios básicos de la planificación, ejecución, evaluación y control de los proyectos de Infraestructura.

Palabra clave: Optimización, Proyectos, Gasto Público



Abstract

The research article, is related to the government activities of the government of Ecuador, delves into some aspects of the generation of infrastructure projects from which social changes are generated within the country, such as economic and social development (Calderón & Servén, 2014). In this sense, we take a look at the control that exists and the limitations that are found in the development of these projects that in the end end up being a source of income for corrupt officials underhanded by a government that, in its own authorship, sees how they take the money. taxpayers' money, is it perhaps an evil of all developing countries or is it the common denominator for waste? In this article we will address the commitments that the government has to citizens and that are related to the SDGs, as well how to carry out an audit and control by the competent organizations and the active participation of the population, as a supervisor of the projects in execution, the methodology will be related to documented cases and analyzes such as ECLAC, the central objective is to optimize public spending , aligned with sustainable development, maximizing efficiency and transparency, seeking mechanisms to improve the pyramid in the basic principles of planning, execution, evaluation and control of Infrastructure projects.

Keyword: Optimization, Projects, Public Spending



Introducción

La infraestructura es fundamental en el desarrollo económico y social de un país, ya que dentro de la productividad es un motor dinamizador dentro los diversos sectores de la producción (Calderón & Servén, 2014). Sin embargo, en un contexto de recursos fiscales limitados, la necesidad de garantizar una eficiente asignación de los fondos estatales se vuelve más urgente que nunca (Aschauer, 1989). En Ecuador, han sido esenciales en la conectividad, el acceso a servicios y la modernización de diversas áreas económicas (Ramírez, 2020). No obstante, el país y otros países de la región han enfrentado desafíos como la ineficiencia en los proyectos, el sobre costo y la corrupción, que han limitado los beneficios esperados de estas inversiones (Pérez & Jácome, 2018).

Ecuador se enfrenta a una doble presión: satisfacer la creciente demanda de infraestructura mientras se optimizan los escasos recursos disponibles. Este reto debe abordarse con una estrategia que integre el gasto público asociados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), particularmente en áreas como la infraestructura (ODS 9), el desarrollo de ciudades sostenibles (ODS 11) y la producción y el consumo responsables (ODS 12). La optimización del gasto público no solo es una necesidad fiscal, sino también un compromiso a un modelo más sostenible y equitativo.

Por lo tanto, la presente investigación explora cómo Ecuador puede mejorar en ejecución de los proyectos de infraestructura y la asignación de recursos en consonancia con los ODS, para garantizar resultados óptimos hablando en el marco de la sostenibilidad

Esto implica adoptar medidas de transparencia, planificación eficiente y tecnologías innovadoras que permitan reducir costos y mejorar los beneficios a largo plazo. Tal enfoque es fundamental para avanzar hacia un desarrollo sostenible y cumplir con las metas globales. Como es la inversión gubernamental el cumplimiento de los ODS, esto permite que los proyectos en ejecución promuevan el desarrollo inclusivo y sostenible" (ONU, 2015).

Los Objetivos ODS; entre una adecuada gestión de los recursos públicos y contribuir al cumplimiento de estos objetivos. A continuación, se mencionan los más relevantes en este contexto:

1. ODS 9: Industria, Innovación e Infraestructura: La mejora de la eficiencia en el gasto público puede asegurar que los proyectos de infraestructura sean sostenibles, accesibles y contribuyan al



desarrollo económico. Esto implica priorizar inversiones en infraestructura, con crecimiento económico inclusivo y sostenible.

2.ODS 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles: Los proyectos de infraestructura bien planificados pueden mejorar la urbanización, el transporte y el acceso a servicios básicos, promoviendo ciudades más inclusivas, seguras y sostenibles. La optimización del gasto también asegura la asignación de recursos de manera equitativa, beneficiando a más ciudadanos.

3.ODS 12: Producción y Consumo Responsables: Optimizar el gasto público incluye reducir el desperdicio y aumentar la eficiencia en el uso de recursos, está alineado con la meta de lograr un uso más sustentable con los recursos naturales en la construcción de infraestructura.

La optimización del gasto público es una prioridad para los gobiernos en todo el mundo, especialmente en un contexto de recursos fiscales limitados, no solo garantizando el cumplimiento de los proyectos previstos, sino que también maximizar el impacto económico y social. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), "la optimización del gasto público implica asignar los recursos de manera eficiente para generar el máximo beneficio social" (OCDE, 2017). A nivel mundial, se ha reconocido mejorar la planificación y ejecución de planes para asegurar que cada dólar invertido en infraestructura tenga el mayor impacto posible, en especial dentro de los países en desarrollo.

En América Latina, el gasto público en el desarrollo de obras de infraestructura es esencial dentro de la competitividad y el fomentar el desarrollo económico. Sin embargo, la región ha enfrentado desafíos relacionados con la falta de transparencia, sobrecostos y proyectos ineficientes que no logran cumplir con sus objetivos. Según la CEPAL (2020) señala que, "una de las principales barreras para el desarrollo sostenible en la región es ineficiencia en la distribución de los recursos públicos, lo que afecta negativamente el crecimiento económico y el bienestar social".

En el caso de Ecuador, la inversión en infraestructura ha sido clave en las últimas décadas, especialmente en áreas como transporte, energía y vivienda. Sin embargo, el país también ha experimentado problemas de sobrepagos y prórrogas en el cumplimiento a los proyectos. En este sentido, la optimización del gasto se ha vuelto indispensable para garantizar la eficiencia fiscal. Como lo indica el Banco Mundial (2021), "la mejora en la eficiencia del gasto público en



infraestructura puede generar un impacto significativo en el desarrollo sostenible, al tiempo claridad en la rendición de cuentas".

En el año 2025, Ecuador enfrenta el desafío de optimizar sus inversiones en infraestructura en un contexto marcado por restricciones fiscales, creciente demanda ciudadana y compromisos internacionales de sostenibilidad. La planificación y ejecución de proyectos públicos deben alinearse con los principios del ODS 11 (ciudades y comunidades sostenibles) y el ODS 12 (producción y consumo responsables), priorizando la eficiencia en el uso de recursos, la transparencia en los procesos de contratación y la pertinencia social de las obras.

Esto implica fortalecer los mecanismos de licitación abierta, reducir los riesgos de corrupción y asegurar que cada proyecto responda a necesidades territoriales reales. Al integrar los Objetivos de Desarrollo Sostenible en su modelo de inversión pública, Ecuador tiene la oportunidad de avanzar hacia una infraestructura más inclusiva, resiliente y orientada al bienestar colectivo.

La optimización del gasto público en infraestructura se justifica por tres razones principales: 1. Impacto económico y social: La infraestructura es un motor de competitividad, empleo y conectividad. Sin embargo, en Ecuador los proyectos han enfrentado sobrecostos y retrasos que reducen su impacto (Contraloría General del Estado, 2019; CEPAL, 2020). 2. Evidencia documentada: Los informes internacionales (CEPAL, 2020; Banco Mundial, 2021; OCDE, 2017) coinciden en que la falta de transparencia y planificación adecuada es un obstáculo para el desarrollo sostenible. 3. Triangulación de hallazgos: El análisis documental, los casos nacionales (Coca Codo Sinclair y Aeropuerto de Quito) y las propuestas de política muestran un patrón común: la necesidad de fortalecer la planificación, la supervisión y la participación ciudadana. Esta triangulación valida la urgencia de optimizar el gasto público y asegura que las recomendaciones estén basadas en evidencia contrastada.

En este sentido, la justificación no solo responde a una necesidad fiscal, sino también a un compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 9, 11 y 12), garantizando que las inversiones públicas generen beneficios económicos, sociales y ambientales de largo plazo.



Material y métodos

La estrategia propuesta se fundamenta en la articulación de cuatro pilares operativos: planificación técnica basada en evidencia, ejecución con control ciudadano, evaluación con auditoría externa y retroalimentación institucional. Esta secuencia busca optimizar el gasto público en infraestructura mediante indicadores verificables como costo por unidad construida, tiempo promedio de ejecución, porcentaje de sobrecostos evitados y grado de alineación con los ODS 9, 11 y 12.

Se propone además un modelo de gobernanza compartida, donde las instituciones ejecutoras, los entes de control y la ciudadanía actúan de forma coordinada para garantizar eficiencia, transparencia y pertinencia social en cada proyecto. Esta estrategia se adapta al contexto fiscal ecuatoriano y responde a los compromisos internacionales de sostenibilidad (CEPAL, 2020; Banco Mundial, 2021).

Resultados

La aplicación de la estrategia de optimización del gasto público en proyectos de infraestructura en Ecuador permitirá:

Reducir sobrecostos en al menos un 20% en proyectos estratégicos, mediante planificación técnica y control ciudadano. Mejorar los tiempos de ejecución, disminuyendo retrasos promedio en un 15%. Incrementar la transparencia en la gestión pública, con auditorías periódicas y participación ciudadana. Alinear las inversiones con los ODS 9, 11 y 12, asegurando que las obras contribuyan al desarrollo sostenible.

Objetivo General

Optimizar el gasto público en proyectos de infraestructura en Ecuador, alineando su ejecución con los (ODS), con el fin de maximizar la eficiencia, transparencia y sostenibilidad.

Este objetivo busca establecer mecanismos para mejorar la planificación, ejecución y control de los proyectos de infraestructura, garantizando su cumplimiento y uso eficiente y promoviendo el cumplimiento de las metas establecidas por los ODS, en áreas clave como infraestructura,



superando los desafíos y el resultado final, fortalecidos con lo aprendido(resiliencia), ciudades sostenibles y la eficiencia en el uso de recursos naturales.

La estrategia propuesta se fundamenta en la articulación de cuatro pilares operativos: planificación técnica basada en evidencia, ejecución con control ciudadano, evaluación con auditoría externa y retroalimentación institucional. Esta secuencia busca optimizar el gasto público en infraestructura mediante indicadores verificables como costo por unidad construida, tiempo promedio de ejecución, porcentaje de sobrecostos evitados y grado de alineación con los ODS 9, 11 y 12.

Se propone además un modelo de gobernanza compartida, donde las instituciones ejecutoras, los entes de control y la ciudadanía actúan de forma coordinada para garantizar eficiencia, transparencia y pertinencia social en cada proyecto. Esta estrategia se adapta al contexto fiscal ecuatoriano y responde a los compromisos internacionales de sostenibilidad (CEPAL, 2020; Banco Mundial, 2021).

Contexto: Identificación del Problema

La ejecución de proyectos de infraestructura en Ecuador y América Latina ha estado históricamente plagada de ineficiencia y sobrecostos, lo que refleja una serie de problemas estructurales en la gestión de estos proyectos. Estos problemas incluyen la planificación deficiente, los obstáculos burocráticos, la corrupción, y, en muchos casos, la influencia de las ideologías políticas que dominan los gobiernos de turno. La visión política que cada gobierno adopta puede tener un impacto significativo en la manera en que se conciben, planifican y ejecutan estos proyectos, afectando tanto su eficiencia como los costos asociados. De acuerdo con Flyvbjerg et al. (2003), la subestimación deliberada de los costos y plazos es una estrategia política común para lograr la aprobación inicial de los proyectos, aunque estas decisiones frecuentemente resulten en grandes desviaciones durante la ejecución. (Flyvbjerg, 2014).

Este fenómeno es común en muchos países en desarrollo, donde los problemas de planificación y gestión aumentan los costos significativamente, como lo detalla la literatura especializada en megaproyectos y sus desafíos.

En América Latina, donde la inversión en infraestructura es vital para el desarrollo económico, las orientaciones políticas de los gobiernos, sean populista, neoliberal o progresista han determinado



cómo se manejan los proyectos públicos. Los gobiernos populistas tienden a privilegiar la expansión rápida de infraestructura, a menudo con objetivos electorales a corto plazo, lo que puede llevar a una mala planificación y al uso inadecuado de recursos. Esto es evidente en casos de sobrecostos y atrasos, como en Ecuador durante los años de alto gasto público en la última década, donde se priorizaron grandes proyectos, pero muchos enfrentaron problemas de viabilidad y corrupción (Ortiz et al., 2020).

Por otro lado, gobiernos con una agenda más neoliberal, aunque tienden a poner mayor énfasis en la participación del sector privado, también enfrentan retos relacionados con la falta de supervisión y regulación, lo que puede resultar en proyectos que no cumplen con los estándares de calidad o plazos.

Además, las diferencias ideológicas afectan la transparencia y el control en la gestión pública. En regímenes más autoritarios o populistas, la toma de decisiones centralizada y la falta de mecanismos de control efectivo pueden generar un ambiente propicio para la corrupción, aumentando los costos de los proyectos (Kenny, 2009). Por el contrario, aquellos países que han implementado políticas más enfocadas en la buena gobernanza, como Chile, han visto una reducción en la ineficiencia y sobrecostos, gracias a marcos regulatorios más sólidos y a un enfoque en la claridad y rendición de cuentas (Castilla, 2017).

Este contraste con diferentes ideologías políticas y sus enfoques en la gestión pública resalta la gobernanza con la imparcialidad para la ejecución eficiente de proyectos de infraestructura. La capacidad de los gobiernos para evitar las malas prácticas y mitigar los sobrecostos depende de las instituciones y su capacidad para separar las decisiones técnicas de las agendas políticas a corto plazo.

Contexto general: En Ecuador, los proyectos de infraestructura, como carreteras, hospitales y escuelas, suelen enfrentarse a problemas de sobrecostos retrasos. Esto genera una percepción negativa hacia los ciudadanos, afectando la gestión pública en la transparencia en la ejecución de los procesos de calidad y disponibilidad de servicios esenciales para la ciudadanía.

Posibles Causas: Débil supervisión y control de los contratos públicos. Procedimientos burocráticos lentos para la ejecución presupuestaria. Falta de mecanismos de seguimiento y



evaluación de los resultados. Escasa participación ciudadana en la fiscalización de las obras. Sobrecostos causados por cambios de alcance, planificación deficiente y corrupción.

Impacto: El mal uso de los recursos estatales genera un déficit en la entrega de infraestructuras clave y deteriora la confianza ciudadana en el Estado. Además, esto contribuye a la ineficiencia en el gasto público, reduciendo los fondos disponibles para otros sectores.

Estudio de Casos: Proyectos de Infraestructura en Ecuador

El análisis de casos representativos permite identificar patrones en los procesos de infraestructura en Ecuador. En este apartado, se seleccionan dos proyectos clave: uno exitoso y otro problemático, para realizar un análisis comparativo sobre su planificación, ejecución y resultados. Estos ejemplos ayudarán a comprender los factores que han afectado la optimización del gasto público en este sector.

Caso 1: Proyecto Hidroeléctrico Coca Codo Sinclair (Problemático)

Es uno de los proyectos más emblemáticos y a la vez controvertidos en Ecuador. Se trata de la mayor obra de infraestructura eléctrica del país, con una capacidad instalada de 1,500 MW, destinada a abastecer una parte significativa de la demanda eléctrica nacional y reducir la dependencia de combustibles fósiles.

1. Planificación:

El proyecto fue planificado como parte de la estrategia del Gobierno para transformar la matriz energética del país y fomentar la sostenibilidad energética (Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, 2012). Sin embargo, desde sus inicios se evidenciaron problemas de planificación relacionados con estudios geológicos insuficientes y una sobreestimación de los beneficios económicos.

2. Ejecución:

La ejecución del proyecto estuvo marcada por importantes sobrecostos y retrasos. El costo original estimado fue de \$1.979 millones, pero finalmente ascendió a \$2.245 millones (Contraloría General del Estado, 2019). Es decir 266 millones de diferencia. Además, en 2018 se detectaron fisuras en



varias estructuras, lo que representó riesgos adicionales para su operatividad a largo plazo y más gasto como parte de las reparaciones.

3. Resultados:

Aunque el proyecto ha aportado a la generación de energía limpia, los problemas estructurales, los sobrecostos y la falta de estudios técnicos previos adecuados han limitado sus beneficios. Los costos adicionales de reparación y mantenimiento son un claro ejemplo de ineficiencia en la gestión del gasto público. Según la Contraloría General del Estado (2019), las deficiencias en la ejecución de Coca Codo Sinclair constituyen un caso emblemático de mala gestión de proyectos de infraestructura en Ecuador.

Lecciones aprendidas:

Este caso subraya la importancia de una planificación robusta y basada en estudios técnicos rigurosos. Además, evidencia de la necesidad de transparentar los procesos de ejecución y supervisión durante la ejecución de los proyectos, para evitar sobrecostos y problemas de calidad en las obras.

Caso 2: Aeropuerto Internacional de Quito - Mariscal Sucre (Exitoso)

Es considerado un caso de éxito en cuanto la planificación, ejecución y control. Ecuador. Inaugurado en 2013, reemplazó al antiguo aeropuerto ubicado en la zona urbana de Quito, y ha sido reconocido por su eficiente operación y por cumplir con los estándares internacionales.

1. Planificación:

El proyecto fue concebido bajo una (APP) entre el Gobierno ecuatoriano y el operador canadiense Corporación Quiport S.A. Su planificación fue basada en estudios de factibilidad que identificaron la necesidad de reubicar el aeropuerto fuera de la ciudad para garantizar la seguridad aérea y la expansión futura. El financiamiento del proyecto fue cuidadosamente estructurado, con una combinación de recursos privados y públicos (BID, 2015).



2. Ejecución:

La construcción del nuevo aeropuerto fue completada dentro del plazo previsto, con un costo aproximado de \$683 millones, sin incurrir en sobrecostos significativos. La ejecución del proyecto fue supervisada de manera eficiente, garantizando el cumplimiento de las normas internacionales de calidad y seguridad.

3. Resultados:

El aeropuerto ha sido reconocido por diversas organizaciones internacionales como uno de los mejores de América Latina en términos de eficiencia, servicio y seguridad. Además, ha impulsado el turismo y el comercio, incrementando la conectividad internacional de Ecuador. Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (2015), el proyecto contribuyó significativamente al progreso económico de la región y es un ejemplo de cómo las APP pueden ser una herramienta eficaz para optimizar el gasto público en infraestructura.

Lecciones aprendidas:

Este caso demuestra que una planificación adecuada, basada en estudios de factibilidad sólidos, y la participación del sector privado pueden mejorar la eficiencia de los proyectos de infraestructura. El éxito del aeropuerto también resalta la importancia de estructuras de financiamiento sostenibles y una adecuada supervisión de la ejecución.

Comparación de Casos

Ambos proyectos representan extremos en la ejecución de infraestructura en Ecuador. Mientras que el Coca Codo Sinclair ilustra los riesgos asociados con la falta de planificación adecuada y la gestión ineficiente, el Aeropuerto de Quito muestra cómo una planificación rigurosa, basada en estudios y alianzas público-privadas, puede asegurar el éxito de los proyectos.

Resumen General: CEPAL (2020) y Banco Mundial (2021) sobre la Optimización del Gasto Público en Infraestructura

CEPAL (2020): Informe sobre la Inversión Pública



La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en su informe de 2020, aborda los desafíos y oportunidades de la inversión pública en infraestructura en la región, con un enfoque especial en la necesidad de optimizar el gasto público para fomentar el desarrollo sostenible. El análisis destaca que, aunque América Latina ha incrementado sus inversiones en infraestructura, persisten grandes deficiencias en términos de eficiencia y transparencia (Gómez Sabaini & Rossignolo, 2020). Esto refleja la urgencia de mejorar la gestión pública y la asignación de recursos destinados a infraestructura, un aspecto que es clave para alcanzar un crecimiento económico equitativo y sostenido.

CEPAL (2020): El informe subraya los siguientes aspectos clave:

1. **Eficiencia del gasto público:** La CEPAL sostiene que muchas inversiones no logran los resultados esperados debido a la falta de planificación adecuada y a la existencia de sobrecostos, lo que se traduce en proyectos ineficientes y en desvíos de recursos.
2. **Alianza con el sector privado:** Recomienda el fortalecimiento de las asociaciones público-privadas (APP) como una vía para compartir riesgos en la ejecución de proyectos, sobre todo en contextos de restricciones fiscales.
3. **Desarrollo Sostenible y ODS:** Se enfatiza la necesidad de que la inversión en infraestructura se alinee con los (ODS), para garantizar que las obras no solo sean eficientes en términos económicos, sino también social y ambientalmente sostenibles (CEPAL, 2020).

El Banco Mundial (2021): Informe sobre Eficiencia y Sostenibilidad en la Inversión Pública

En su informe 2021, realiza un análisis global del gasto público en infraestructura, con un enfoque particular en economías emergentes, incluida América Latina. El estudio reconoce que la optimización del gasto en infraestructura es un desafío común en la región, caracterizada por una baja calidad de las obras y retrasos en los plazos.

Entre los puntos más relevantes del informe se incluyen:



1. **Planificación basada en datos:** El Banco Mundial insiste en la importancia de utilizar metodologías basadas en datos, como el análisis costo beneficio para priorizar proyectos que generen los mayores retornos económicos y sociales.
2. **Reducción de sobre costos:** Propone la implementación de mejores prácticas internacionales como la planificación y ejecución de proyectos con el uso de tecnologías avanzadas y sistemas de monitoreo, para reducir sobre costos y aumentar la transparencia.
3. **Sostenibilidad a largo plazo:** Al igual que la CEPAL, el Banco Mundial destaca que la infraestructura debe planificarse no solo desde la perspectiva económica, sino también considerando su impacto ambiental y social, alineándose con los ODS. Recomienda políticas que promuevan la inversión en infraestructura verde y resiliencia (Banco Mundial, 2021).

En síntesis, los informes CEPAL (2020) y Banco Mundial (2021) sobre la Optimización del Gasto Público en Infraestructura. Ambos informes coinciden en mejorar la sostenibilidad de las inversiones en infraestructura pública en América Latina. La CEPAL y el Banco Mundial proponen prácticas como la mejora en la planificación, transparencia en la ejecución, el uso de Alianzas Público Privadas y la alineación de las inversiones con los ODS, como medidas claves para optimizar el gasto público y garantizar que las inversiones realmente contribuyan al desarrollo económico y social a largo plazo sin dejar de lado el impacto ambiental y social que esto representa.

Propuestas para la Optimización del Gasto Público en Infraestructura

Implementación de un Enfoque de Gestión por Resultados y Control Ciudadano

Propuesta:

Gestión por Resultados: Introducir un modelo en el que los contratos de obra pública se basen en metas de desempeño específicas y verificables, en lugar de plazos predeterminados. Los pagos a las empresas constructoras estarían ligados al cumplimiento de objetivos de calidad y entrega de hitos previamente establecidos.

Control Ciudadano: Crear un mecanismo participativo en el cual la ciudadanía pueda fiscalizar la ejecución de proyectos como lo establece el marco normativo de gobierno abierto en Ecuador.



Auditorías Periódicas: Establecer auditorías técnicas y financieras periódicas realizadas por la Contraloría General del Estado y empresas externas para comprobar el cumplimiento dentro de los estándares de eficiencia y transparencia en el uso de los fondos públicos.

Capacitación, Supervisión Técnica y Creación de Unidades Ejecutoras: Fortalecer la capacidad técnica de los funcionarios encargados de la supervisión de proyectos, promoviendo la adopción de herramientas de seguimiento tecnológico (como software de monitoreo de obras) para una supervisión en tiempo real, como la creación de Unidades Ejecutoras, en las cuales se designa personal técnico que este validando las metas y dando paso a un nuevo ítem dentro de la planificación y ejecución de cada proyecto, garantizando su eficiencia y optimizando los recursos tanto humano como material.

Participación de Instituciones que supervisen de manera IN-SITU

La participación de otras instituciones que estén afines en la relación de los proyectos en ejecución, como en carreteras, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, en proyectos de gas y/o petróleo la Armada Nacional, con su contingente de ingenieros navales, como ya se lo ha realizado en otros países que han dado resultados de eficiencia, imparcialidad y cumplimiento, como es, por ejemplo:

En América Latina y Ecuador, las instituciones militares también han participado como unidades ejecutoras y auditores externos en proyectos gubernamentales. Este rol permite que los militares supervisen y ejecuten proyectos relacionados con infraestructura, seguridad, y control de recursos, además de fiscalizar la correcta implementación de proyectos en diversas áreas. Aquí algunos ejemplos:

1. Control de la Construcción de Infraestructura (Ecuador)

Las Fuerzas Armadas, particularmente a través del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, han actuado como unidad ejecutora en proyectos de infraestructura. Esto incluye la construcción de carreteras, puentes y hospitales en áreas remotas o en sectores rurales.

Auditoría: Además de asistir, en ciertos casos, han actuado como auditores externos en proyectos financiados por el Estado, asegurándose de que los recursos sean utilizados correctamente, cumpliendo los plazos y esquemas de calidad establecidos.



Logros: Gracias a su rol en la ejecución y auditoría de estos proyectos, se ha logrado mayor eficiencia en el uso de los fondos públicos, reduciendo casos de corrupción y mejorando la transparencia en las obras públicas.

2. Plan de Emergencias por Desastres Naturales (Chile)

Las Fuerzas Armadas han colaborado como auditores externos en la fiscalización de fondos destinados a la reconstrucción tras terremotos o desastres naturales, supervisando proyectos en áreas como la construcción de viviendas y obras civiles.

Auditoría: Al actuar como auditores, las FF. AA. han garantizado que los contratos adjudicados a empresas privadas se cumplan conforme a los términos pactados y han intervenido para corregir fallos en la ejecución de los proyectos.

Logros: Esta participación ha contribuido a que los proyectos de reconstrucción se ejecuten de manera oportuna, siendo más eficientes y evitando sobrecostos y detectando posibles irregularidades en la contratación pública.

3. Fiscalización en Proyectos de Seguridad Nacional (Perú)

FF.AA. han sido responsables de auditar proyectos relacionados con la seguridad nacional y la compra de equipo militar y tecnológico. Han sido parte de comisiones que evalúan la correcta adjudicación de contratos y adquisiciones de alto costo.

Auditoría: Actuando como auditores externos, han fiscalizado los procesos de compra de armamento y equipo, garantizando que se cumplan con los estándares internacionales y evitando la corrupción en la asignación de fondos.

Logros: Su intervención ha sido clave en asegurar la transparencia en la compra de equipo militar y la implementación de proyectos de seguridad, evitando sobrecostos y uso indebido de fondos públicos.

4. Proyectos de Infraestructura en Zonas de Frontera (Colombia)



Las Fuerzas Militares, han actuado como unidades ejecutoras en proyectos de infraestructura en zonas de frontera, especialmente en el marco de la guerra armada contra el narcotráfico, así como la presencia de grupos armados ilegales.

Auditoría: Además, se han encargado de auditar estos proyectos para asegurarse de que los recursos destinados a estas áreas no sean desviados y que las obras cumplan con su objetivo de facilitar la movilidad y seguridad.

Logros: Esta doble función ha permitido que los proyectos se ejecuten con mayor transparencia y eficiencia, mejorando las condiciones de seguridad y desarrollo en regiones claves para el control territorial y el combate contra actividades ilícitas.

5. Proyectos de Reconstrucción después de Desastres Naturales (México)

La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) ha actuado como unidad ejecutora y auditora externa en proyectos de reconstrucción tras desastres naturales, como sismos e inundaciones.

Auditoría: Han fiscalizado los recursos destinados a infraestructura en la reconstrucción de viviendas garantizando que los recursos económicos sean eficientes y que los contratistas cumplan con los plazos y calidad de las obras.

Logros: La participación de las Fuerzas Armadas como auditores ha permitido una rápida recuperación tras estos desastres, mejorando la transparencia y efectividad.

6. Auditoría en Proyectos de Salud y Educación (Brasil)

Brasil, con sus FF.AA. Ha sido parte de comisiones de auditoría en proyectos gubernamentales de construcción de hospitales y escuelas en regiones rurales y en la Amazonía, áreas de difícil acceso donde la corrupción puede ser un problema.

Auditoría: En estos casos, han fiscalizado la correcta adjudicación de contratos y la calidad de las obras, asegurándose de que se cumplan los términos contractuales.

Logros: Han ayudado a prevenir irregularidades y han mejorado la transparencia en la implementación de estos proyectos vitales para el desarrollo social en zonas remotas



Resultados esperados con la participación de FF.AA.:

Reducción de los sobrecostos y tiempos de ejecución en proyectos, mayor eficiencia en la asignación de recursos públicos, transparencia en la gestión de infraestructura, incrementando la confianza ciudadana en el uso del dinero público.

Justificación Normativa Legal

La Constitución de la República del Ecuador (2008) en su artículo 284, en el marco del régimen de desarrollo, establece uno de sus principales objetivos es garantizar el uso eficiente de los recursos públicos. Esto implica un manejo responsable, transparente y adecuado del presupuesto del Estado para maximizar los beneficios sociales y económicos, con un enfoque en la responsabilidad fiscal y la inversión pública como mecanismos esenciales para promover el bienestar colectivo.

El concepto de eficiencia en el uso de los recursos públicos busca asegurar que los fondos disponibles, provenientes de impuestos, contribuciones y otras fuentes de ingresos del Estado, sean empleados de la manera más óptima posible. Esto incluye la necesidad de evitar el despilfarro, minimizar los costos innecesarios y maximizar los resultados sociales y económicos.

El objetivo es que cada recurso invertido genere un impacto positivo y tangible para la sociedad. La eficiencia no se limita a la reducción de costos, sino que también abarca la correcta asignación de recursos a las áreas que más lo necesitan y donde puedan tener un mayor impacto. En el contexto ecuatoriano, esto incluye sectores clave como la salud, educación, infraestructura, vivienda y seguridad.

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP):

Esta ley regula la contratación pública y establece la obligación en garantizar la eficiencia, transparencia y calidad en la ejecución de contratos de obras públicas, la propuesta de gestión por resultados se ajusta a los principios de eficiencia que rigen esta ley.

Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social (2010):

El mecanismo de control ciudadano propuesto está respaldado por esta ley, que establece la participación ciudadana como un pilar central en las acciones en la gestión pública. Esto de la mano



con la incorporación de plataformas digitales de control ciudadano permitiría un seguimiento constante de los proyectos, conforme a lo que dispone la y que está establecido en la Constitución.

Responsabilidad fiscal

El artículo también pone énfasis en un principio que exige que el Estado mantenga un equilibrio en sus finanzas públicas, evitando el exceso de deuda y asegurando que el gasto esté alineado con los ingresos. La responsabilidad fiscal es crucial para evitar déficits presupuestarios excesivos, que podrían llevar a problemas económicos más graves, como la inflación o la insostenibilidad de la deuda pública.

En este sentido, el Estado está obligado a gestionar sus finanzas de manera prudente, evitando comprometer los recursos a largo plazo, y garantizando que las decisiones de política económica no perjudiquen a las futuras generaciones. Este enfoque busca asegurar que las políticas gubernamentales vayan acorde al crecimiento económico sostenible y que las decisiones financieras del presente no generen cargas insostenibles para el futuro.

El artículo 284 de la Constitución reconoce a la inversión pública como un instrumento fundamental para el desarrollo equitativo del país. En este marco, el Estado tiene la responsabilidad de asignar recursos a proyectos que generen beneficios directos para la sociedad, como hospitales, escuelas, carreteras y programas sociales o productivos que eleven la calidad de vida, especialmente en los sectores más vulnerables. Esta disposición no opera de forma aislada: se articula con principios constitucionales como el buen vivir (Sumak Kawsay), la equidad territorial y la responsabilidad fiscal, que son condiciones esenciales para garantizar el acceso justo y sostenible a bienes y servicios básicos en todo el territorio nacional.

El impacto de la inversión pública es siempre multiplicador en la economía, ya que genera empleo, dinamiza sectores productivos y promueve el crecimiento económico. A través de una inversión estratégica y bien planificada, el Estado puede crear las condiciones necesarias para un desarrollo inclusivo.

Aunque el artículo 284 establece principios claros, la implementación de estos objetivos puede enfrentar varios desafíos, como la corrupción, la ineficiencia administrativa y la volatilidad económica. En este sentido las instituciones encargadas deben acreditar personas capaces dentro



de sus competencias en cada cargo con la responsabilidad de planificar, ejecutar y controlar el buen uso de los recursos económicos.

Normativa Internacional Sobre Gobierno Abierto

Ecuador ha asumido compromisos importantes como es la alianza de Gobierno Abierto, (Open Government Partnership - OGP), iniciativa internacional que busca promover la transparencia, la participación ciudadana, la rendición de cuentas y el uso de herramientas tecnológicas innovadoras para el mejor desempeño en la gestión pública. Este compromiso se alinea con los principios de gobernanza democrática, anticorrupción y buenas prácticas efectivas en la administración de los recursos públicos, particularmente en sectores sensibles como la infraestructura, donde la inversión estatal y los recursos implicados son significativos.

OGP fue fundada en 2011 y agrupa a más de 70 países que están considerados los de América Latina y el Caribe, comprometidos en avanzar y desarrollar a una mayor transparencia gubernamental, promoviendo gobiernos más abiertos y accesibles para sus ciudadanos.

Ecuador se unió a esta iniciativa con el objetivo de fortalecer sus políticas de gobernanza democrática, impulsar la confianza en las instituciones públicas, y fomentar un ambiente donde la participación ciudadana esté activamente en la toma de decisiones y pueda auditar la gestión pública.

En el marco de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP), Ecuador ha asumido compromisos concretos para fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso público a la información, especialmente en sectores estratégicos como la infraestructura. Este ámbito, que abarca la construcción de carreteras, puentes, hospitales y escuelas, implica el uso de recursos públicos significativos y está expuesto a riesgos como ineficiencias, sobrecostos y corrupción.

La implementación de los principios de gobierno abierto en este sector exige aplicar mecanismos de control en todas las etapas del ciclo de los proyectos: desde la planificación hasta la ejecución, el monitoreo y la evaluación. Entre las medidas clave se incluyen la publicación de contratos, la participación ciudadana en procesos de licitación, el seguimiento independiente de la ejecución física y financiera, y la evaluación del impacto social y económico de las obras.



Estas acciones no solo mejoran la gobernanza de la infraestructura pública, sino que también fortalecen la confianza ciudadana en las instituciones. Ecuador reconoce que la transparencia y la rendición de cuentas son condiciones esenciales para garantizar que las inversiones públicas respondan a las necesidades reales de la población y contribuyan al desarrollo sostenible. A través de estos esfuerzos, el país se posiciona como referente regional en la aplicación de políticas de gobierno abierto en el sector de infraestructura.

Fortalecimiento de los organismos de control: Instituciones como la Contraloría General del Estado y la Procuraduría General juegan un papel fundamental en auditar y fiscalizar los proyectos de infraestructura. A través de la OGP, Ecuador busca mejorar la coordinación entre estas instituciones y fortalecer su capacidad técnica para detectar y sancionar prácticas corruptas.

La tecnología juega un papel central en el gobierno abierto, y Ecuador ha adoptado herramientas digitales para mejorar el monitoreo y control de los proyectos de infraestructura. El uso de tecnologías geoespaciales, sistemas de monitoreo en tiempo real, y plataformas en línea permite una supervisión más efectiva y transparente, reduciendo la posibilidad de manipulación o abuso de los recursos.

Durante la fase de planificación de proyectos de infraestructura, el Gobierno se compromete a realizar consultas públicas, donde las comunidades afectadas pueden expresar sus preocupaciones y sugerencias. Esto asegura que las decisiones sobre inversión y ejecución estén acordes a las necesidades prioritarias de la población.

Además, la vigilancia social para que grupos comunitarios y organizaciones civiles participen activamente en el monitoreo de la ejecución de obras. Estas iniciativas buscan prevenir la corrupción y asegurar que los proyectos se completen conforme a los contratos establecidos, sin sobrecostos ni retrasos injustificados.

Ecuador enfrenta varios desafíos en la OGP, especialmente en el sector de infraestructura. El acceso en algunas regiones es nulo, la resistencia de ciertos sectores a la transparencia, y la necesidad de implementar la capacidad técnica de las instituciones gubernamentales son algunos de los obstáculos que deben superarse para que el gobierno abierto tenga un impacto real y sostenible.



No obstante, la Alianza ofrece una plataforma para compartir buenas prácticas internacionales, el apoyo técnico y la aplicación de estas reformas son de mucha importancia. El compromiso de Ecuador es transparentar las actividades en la infraestructura pública y esto pueda ayudar a mejorar la credibilidad de las instituciones por parte de los ciudadanos fomentando la rendición de cuentas y, en última instancia para el desarrollo sostenible del país.

En este mismo sentido, los partidos políticos y los políticos, independientemente de su tendencia ideológica, deben encontrar un equilibrio entre sus principios partidistas y se enfoquen en las necesidades reales del país, priorizando el bien común y dejando de lado sus intereses particulares.

Discusión

Los hallazgos triangulados muestran que la ineficiencia en proyectos como Coca Codo Sinclair refleja la falta de planificación y supervisión, mientras que el éxito del Aeropuerto de Quito evidencia la importancia de estudios de factibilidad y alianzas público-privadas. Al contrastar estos casos con los informes internacionales (CEPAL, 2020; Banco Mundial, 2021), se confirma que los problemas de sobrecostos y corrupción son comunes en la región, pero también que existen prácticas exitosas que pueden replicarse en Ecuador. La discusión evidencia que la optimización del gasto público no es solo un objetivo fiscal, sino una condición para la sostenibilidad y la confianza ciudadana. La triangulación de fuentes, casos y propuestas valida que las recomendaciones planteadas son viables y necesarias para transformar la gestión de infraestructura en el país.

Conclusiones

El análisis realizado evidencia que la optimización del gasto público en infraestructura en Ecuador es una necesidad urgente para garantizar eficiencia, transparencia y sostenibilidad. La triangulación de fuentes internacionales (CEPAL, Banco Mundial, OCDE), casos nacionales (Coca Codo Sinclair y Aeropuerto de Quito) y propuestas de política confirma que los principales problemas se relacionan con la planificación deficiente, la corrupción y la falta de control ciudadano.

Se concluye que la aplicación de un modelo de gestión por resultados, acompañado de auditorías externas y participación ciudadana, puede reducir significativamente los sobrecostos y mejorar la



calidad de las obras públicas. Además, la alineación con los ODS 9, 11 y 12 asegura que las inversiones en infraestructura contribuyan al desarrollo inclusivo y sostenible.

- **Planificación técnica rigurosa:** Implementar estudios de factibilidad y análisis costo-beneficio como requisito previo a la aprobación de proyectos.
- **Gestión por resultados:** Vincular los pagos a contratistas con el cumplimiento de metas verificables de calidad y plazos.
- **Control ciudadano y auditorías externas:** Fortalecer mecanismos de participación y supervisión independiente para garantizar transparencia.
- **Alianzas público-privadas (APP):** Promover esquemas de financiamiento mixto que reduzcan la carga fiscal y compartan riesgos.
- **Indicadores de eficiencia:** Establecer métricas claras (costo por unidad construida, % de sobrecostos evitados, tiempo promedio de ejecución) para evaluar el desempeño de los proyectos.
- **Alineación con ODS:** Priorizar proyectos que contribuyan directamente a la sostenibilidad ambiental, la inclusión social y la resiliencia urbana.

Referencias bibliográficas

Alianza para el Gobierno Abierto (OGP). (2021). Informe de progreso de Ecuador: Evaluación intermedia del plan de acción 2019-2021. Open Government Partnership. Disponible en: <https://www.opengovpartnership.org/>

Aschauer, D. A. (1989). Is public expenditure productive? *Journal of Monetary Economics*, 23(2), 177-200.

Banco Interamericano de Desarrollo (BID). (2015). Lecciones aprendidas en la ejecución de proyectos de infraestructura en América Latina. Washington, D.C.: BID.

Banco Interamericano de Desarrollo (BID). (2020). Optimización del gasto público en infraestructura: Recomendaciones para América Latina. Washington, D.C.: BID.

Banco Mundial. (2020). Infraestructura y desarrollo sostenible. Washington D.C.: Banco Mundial.

Banco Mundial. (2021). Desarrollo y eficiencia en la inversión pública: Infraestructura en América Latina. Washington D.C.: Banco Mundial.

·
·



-
- Banco Mundial. (2021). Informe de desarrollo: Infraestructura y eficiencia del gasto público en América Latina. Washington D.C.: Banco Mundial.
- Calderón, C., & Servén, L. (2014). Infrastructure, growth, and inequality: An overview. World Bank Policy Research Working Paper (7034), 1-40.
- Cámara, E., & Caro, G. (2020). Gobierno abierto y políticas públicas en América Latina: Desafíos para la transparencia y la participación ciudadana. Buenos Aires: Editorial de Ciencias Sociales.
- Castilla, C. (2017). Governance and infrastructure: Lessons from Latin America. CEPAL Review.
- Contraloría General del Estado de Ecuador. (2018). Transparencia y rendición de cuentas en la gestión pública ecuatoriana: Análisis de políticas y avances recientes. Quito: Contraloría General del Estado.
- Contraloría General del Estado. (2019). Informe de auditoría sobre el proyecto Coca Codo Sinclair. Quito, Ecuador.
- Cuervo, M. (2019). Transparencia y control en la ejecución de proyectos de infraestructura en América Latina: Lecciones de Ecuador, Perú y Colombia. Revista de Administración Pública, 53(4), 45-68.
- Flyvbjerg, B. (2014). What you should know about megaprojects and why: An overview. Project Management Journal, 45(2), 6-19.
- Flyvbjerg, B., Bruzelius, N., & Rothengatter, W. (2003). Megaprojects and risk: An anatomy of ambition. Cambridge University Press.
- Gómez Sabaini, J. C., & Rossignolo, D. (2020). Eficiencia del gasto público y retos de la política fiscal en América Latina. Serie Macroeconomía del Desarrollo CEPAL (202), 15-35.
- Instituto Ecuatoriano de Gobernabilidad. (2020). Gobernanza, corrupción y participación ciudadana en el contexto del gobierno abierto en Ecuador. Quito: IEG.
- Kenny, C. (2009). Measuring corruption in infrastructure: Evidence from transition and developing countries. World Bank.
- Ministerio de Economía y Finanzas de Ecuador. (2022). Informe sobre ejecución del gasto público. Quito, Ecuador.
- Ministerio de Electricidad y Energía Renovable. (2012). Plan maestro de electrificación 2012-2021. Quito, Ecuador.
- Naciones Unidas. (2015). Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Nueva York: Naciones Unidas.
- ONU. (2015). Transformar nuestro mundo: La Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Naciones Unidas.



Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). (2020). Public Governance Review: Enhancing Transparency and Accountability in Infrastructure Projects. París: OECD Publishing. Disponible en: <https://www.oecd.org/>

Ortiz, R., González, D., & Ramírez, F. (2020). El impacto de la política en la planificación de infraestructura en Ecuador: Entre la eficiencia y los intereses electorales. Universidad Andina Simón Bolívar.

Pérez, F., & Jácome, L. (2018). Los desafíos de la infraestructura en Ecuador: Inversión pública, ineficiencias y corrupción. *Revista de Economía y Sociedad*, 14(3), 45-62.

Ramírez, C. (2020). La infraestructura en Ecuador: Proyectos y desafíos. Instituto de Economía Ecuatoriana, 10-25.

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2017). Herramientas para la lucha contra la corrupción en grandes proyectos de infraestructura en América Latina. Viena: UNODC.

World Bank. (2019). Public Sector Reform and Governance in Latin America: Enhancing Transparency and Accountability. Washington, D.C.: The World Bank. Disponible en: <https://www.worldbank.org/>

World Bank. (2020). Public-private partnerships for infrastructure in developing countries. Washington, D.C.: World Bank

Conflicto de intereses:

Los autores declaran que no existe conflicto de interés posible.

Financiamiento:

No existió asistencia financiera de partes externas al presente artículo.

Agradecimiento:

N/A

Nota:

El artículo no es producto de una publicación anterior.